



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO:	11001-33-35-026-2018-00554-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	EDWIN GREGORIO GONZÁLEZ NIEVES
DEMANDADO:	NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL

EDWIN GREGORIO GONZÁLEZ NIEVES, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL**, con el objeto de obtener la nulidad del siguiente acto administrativo:

“Sírvase declarar la Nulidad parcial del acto complejo contenido en las actas de la Junta de Evaluación y Clasificación para oficiales de la Policía Nacional, contenida en el acta No 0444-ADEHU-GRUAS-2.25 del 28 y 29 de mayo de 2018, de la Junta de Generales de la Policía Nacional, contenida en el acta No 022-ADEHU-GRUAS-2-25 del 1° de Junio de 2018 y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, contenida en el acta No 006-ADEHU-GRUAS-2.25 del 7 de junio de 2018.

(...)”

Analizada la integridad de la demanda, y los demás documentos aportados a la actuación, se observa que en torno al presupuesto procesal del juez competente, no es posible avocar el conocimiento del medio de control, de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. De la estimación razonada de la cuantía

El artículo 155 de la ley 1437 de 2011, señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia, refiriéndose en el numeral 2° específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)”

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

Subraya fuera de texto

Adicionalmente al definir nuestro legislador la competencia en razón de la cuantía determinó unas condiciones especiales para su fijación, en efecto establece la norma:

“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

Pues bien, el apoderado de la parte actora, al realizar los planteamientos en torno a la fijación de la cuantía dentro del escrito de demanda, determinó lo siguiente:

“Se estima la cuantía, por cuanto los compañeros de curso no han ascendido, hasta ahora fueron seleccionados.

Por DAÑOS MORALES que le han sido causados al actor por no ser seleccionado y/o recomendado para el concurso del curso de ascenso inmediatamente superior de que ha sido víctima, los cuales estimamos en el equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES MENSUALES (100 SMLVM).

Por daño al honor Policial, al buen nombre y dignidad del actor;

Los Daños y perjuicios causados en el actor a razón del retiro forzoso del que ha sido objeto, lo que generó daños en el buen nombre, así como en el honor policial y en la dignidad del actor porque al no ser seleccionado y/o recomendado para

el concurso del curso de ascenso inmediatamente superior en las circunstancias que rodearon su caso induce a pensar que fue una persona negligente, irresponsable y sin vocación de servicio, generando reprobación entre sus superiores, compañeros y subalternos, con esto se le causó graves perjuicios morales y psicológicos tasados en CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES LEGALES MENSUALES -(400 SMVLM)”

Teniendo en cuenta lo anterior, en torno a las aspiraciones económicas legítimas que fundan las pretensiones de la demandante, estimadas en **400 salarios mínimos legales mensuales vigentes**, es decir, en **\$312.496.800 (trescientos doce millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos pesos)**, y de conformidad con los documentos soporte de dichas pretensiones, es preciso señalar que los montos indicados superan los cincuenta (50) salarios mínimos establecidos para efectos de determinar la competencia en virtud de este factor.

En este orden de ideas, **al superarse los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes de que trata el artículo 155 del C.P.A.C.A., no es posible avocar conocimiento en el presente asunto.**

Recuerda el Despacho, que mediante providencia del 20 de abril de 2015, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2014-02729-01, el Consejo de Estado se pronunció en torno a la aplicación de las reglas de competencia definidas frente al presupuesto procesal de la cuantía, ratificando que es deber del juez verificar dicho elemento al momento de admitir la demanda, señalando que son aplicables de manera preferente las disposiciones jurídicas que frente a esta materia contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Corolario de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011¹, en virtud del factor cuantía, el competente para conocer el presente asunto es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y por ello se ordenará su remisión a la referida Corporación.

Por lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR QUE ESTE JUZGADO CARECE DE COMPETENCIA para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por **EDWIN GREGORIO GONZÁLEZ NIEVES**, contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL**.


SEGUNDO.- REMITIR el presente expediente, una vez ejecutoriado este proveído, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Reparto, por conducto de la Oficina de Apoyo, de conformidad con las

¹ Art. 152.- Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (...) 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

consideraciones anotadas en la parte motiva.

TERCERO.- Por Secretaría déjense las constancias respectivas y dese cumplimiento a la mayor brevedad a lo aquí resuelto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez



JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **19 DE FEBRERO DE 2019**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)


LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA